

(41) México exportador, México, 1939, p. 416.

(42) Primer censo industrial. Resumen general, México, 1933, vol. I, p. 8. Los cálculos fueron realizados por la revista Investigación económica, UNAM, 1947, vol. VIII, N. 1, pp. 90-91.

(43) México exportador, México, 1939, p. 87.

(44) Anuario estadístico, 1938, México, 1939, p. 248.

(45) México exportador, México, 1939, p. 416.

(46) Anuario estadístico, 1940, México, 1941, (La página no se indica en el texto en ruso: N. de la R.).

(47) Anuario estadístico, 1938, México, 1939, p. 158.

(48) Cf. XII Pleno de la Internacional Comunista. Informe mimeografiado. t. II. Moscú, 1939, p. 52.

(49) Anuario estadístico, 1938, México, 1939, p. 158.

(50) Id., pp. 180-181.

(51) Id., p. 158.

(52) Cf. Los problemas agrarios, 1934, ed. rusa, N: 3-4, pp. 128-129.

(53) CTM, 1936-1941, México, 1941, p. 48.

(54) Id., p. 48.

(55) The Mexican Government in the Presence of Social and Economic Problems, México, 1938, p. 40.

(56) Alejandro Carrillo, México's Resources for Livelihood, México, 1937, p. 20.

... los representantes de los elementos conservadores, la
 esta situación de la clase obrera eran severamente
 principales política evidentemente "protección" del gobierno
 de Carranza agudizó notoriamente las contradicciones en los
 círculos gubernamentales. Las fuerzas que se oponían a Carranza
 se unieron en torno al General Obregón. El movimiento revolucionario
 de los constitucionalistas contra los carranzistas se desarrolló
 y enarbó el ejército que derrotó al carranzismo.
 El movimiento revolucionario sin embargo el ejército que derrotó al carranzismo
 y enarbó el ejército que derrotó al carranzismo.

Unidad II

EL CAUDILLISMO REVOLUCIONARIO

Con la nueva Constitución de 1917, podría decirse que termina cronológicamente la Revolución Mexicana. Su aprobación, empero, no eliminó toda la agudeza de las contradicciones sociales en el país, la encarnizada rivalidad entre los distintos grupos políticos. La peculiar distribución de las fuerzas sociales ejercía una fuerte influencia sobre la situación política del país; la cual estaba condicionada, en gran parte, por la herencia de la guerra civil entre las masas campesinas, a cuya cabeza estaban los destacados jefes Zapata y Villa, por un lado y los llamados constitucionalistas, bajo la dirección de Carranza, por el otro. Objetivamente, esta guerra, que tuvo un carácter profundamente social, fue la lucha de dos formas de solucionar las tareas de la revolución, especialmente el problema agrario.

La derrota del movimiento campesino que luchaba, si se tienen en cuenta sus objetivos y tareas, por la vía democrática-burguesa de desarrollo de la revolución, condujo al estancamiento de la revolución y significó la consolidación de las posiciones del ala conservadora constitucionalista. El gobierno de Carranza, que subió al poder después de la proclamación de la Constitución de 1917, reflejaba en primer lugar, los intereses del movimiento constitucionalista. En torno a Carranza se agrupa-

Tal estructura de los órganos estatales se explica, por la seria influencia que adquirieron las tendencias separatistas y el regionalismo en la vida política nacional. Durante los años de la revolución, nuevamente se acentuaron en muchas regiones las tendencias separatistas, que fueron atenuadas, pero de ningún modo liquidadas, en el periodo de la dictadura de Porfirio Díaz. Una de las tareas del gobierno de Obregón y de los gobiernos subsiguientes fue la superación de las tendencias separatistas, la creación de una forma centralizada de gobierno, lo cual se podía realizar sólo con la ayuda del ejército⁶. Por supuesto que el mero hecho del excesivo fortalecimiento de los círculos militares en las localidades, ocultaba no pocos peligros para la unidad política del país. Muchos oficiales militares estaban contagiados de un ánimo separatista alimentado, en alto grado, por la ambición política y propiciado por los enemigos del régimen existente. Esto engendró una situación bastante peculiar. El ejército, que al parecer era la única esperanza de apoyo del caudillismo revolucionario, era el que mayores disgustos acarrearaban a los círculos gobernantes. Los levantamientos militares que tan grave daño causaron al país, fueron muy frecuentes en los años veinte.

En estas condiciones, sólo otras fuerzas políticas como las organizaciones obreras, campesinas y de masas podían servir de contrapeso al ejército. La iniciativa en esto fue tomada por el gobierno de Obregón. En agosto de 1919, firmó un pacto de ayuda mutua con la dirección de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), fundada en 1918. Durante el golpe de Estado de 1920, esta organización apoyó activamente a Obregón.

Los círculos gobernantes prestaban especial atención a la liquidación de los últimos focos del movimiento revolucionario campesino. Por medio de concesiones y de una táctica más flexible pudieron atraer a su lado a destacados partidarios de Emiliano Zapata; lograron el cese de la lucha armada, en primer lugar, en el sur del país, donde actuaban los destacamentos campesinos. Uno de los notables ideólogos del zapatismo, Antonio Díaz Soto y Gama, que se adhirió al nuevo régimen, escribió que sólo gracias a Obregón se unieron el norte y el sur del país⁷.

El gobierno de Obregón logró el apoyo de los trabajadores al llevar a cabo algunas reformas sociales proclamadas por la Constitución de 1917.

Según *El Machete* el nuevo régimen no se hubiera mantenido mucho tiempo en el poder sin el apoyo de los obreros y, principalmente, de los campesinos⁸.

¿Cómo caracterizar la naturaleza social de las fuerzas que subieron al poder? ¿Qué política aplicaron?

En los años veinte, se decía que el régimen político del caudillismo revolucionario era **pequeño-burgués**, y se afirmaba que la pequeña burguesía —como fuerza social especial capaz de jugar un papel independiente en las condiciones específicas de México— se había consolidado en el poder.

Es indiscutible que la pequeña burguesía jugó un papel muy importante en la revolución e indudablemente que de sus filas surgieron, en gran parte, los cuadros del nuevo régimen. Sin embargo, este hecho no nos da aún fundamento para establecer una conclusión acerca de la llegada al poder de la pequeña burguesía, como capa social especial que desempeña un papel independiente en la vida política del país. En realidad, el poder se encontraba en manos de una agrupación política que no representaba los intereses de las capas pequeño-burguesas de la población; dicho grupo —conocido como "grupo de Sonora", por el origen geográfico de muchos de sus miembros— interpretaba, a causa de su situación social, los intereses de los rancheros y los terratenientes de tipo capitalista, especialmente de los estados del norte del país.

Díaz Soto y Gama, convertido en ideólogo del agrarismo oficial, en su libro *La cuestión agraria en México*, se presenta como apologista de la política de Obregón quien, según palabras de aquél, aspiraba a crear una serie de sólidas economías granjeras, pues veía en ellas, y no en los "ensayos colectivistas", el futuro de México. Al indicar que los obregonistas velaban también por los intereses de los campesinos indígenas (su inclinación por las formas comunales de posesión de la tierra), el ideólogo del agrarismo gubernamental consideraba que el objetivo final del obregonismo era la consolidación de un régimen de desarrollo "armonioso" de la grande y la pequeña propiedad agrícola⁹. Estas confesiones de uno de los más cercanos partidarios de Obregón son muy importantes, pues ayudan a comprender la inequívoca defensa, por parte de los políticos del grupo de Sonora, de la propiedad privada y del desarrollo de México por el camino capitalista.

Pero sería erróneo deducir del predominio de dicha agrupación política, el surgimiento en México de un gobierno de rancheros. El asunto era mucho más complicado. Los hombres del estado de Sonora no hubieran logrado tomar el poder en sus manos sin vencer el enfoque provincialista de los problemas políticos del país y manifestar flexibilidad y condescendencia en las relaciones mutuas con otras fuerzas sociales. El simple hecho del acuerdo con la dirección de las organizaciones obreras y campesinas muestra la perspicacia de personajes del tipo de Obregón y su comprensión de la situación política que contribuía a la toma del poder bajo la bandera de la salvación de la revolución, de la liquidación del caos y la anarquía en el país. En las condiciones de determinado equilibrio de las fuerzas en lucha, en primer plano sobresalían, inevitablemente, los métodos bonapartistas de gobierno con la hábil utilización, por parte de los caudillos, de las contradicciones entre las clases y el equilibrio entre la política y la ideología. Antonio Gramsci, en uno de sus trabajos dedicado a la esencia del bonapartismo o cesarismo, observa que "el cesarismo es el reflejo de una situación en la que las fuerzas que luchan entre sí se hallan en estado de catastrófico equilibrio, o sea, de tal equilibrio en el que la continuación de la lucha puede tener sólo una salida: el aniquilamiento mutuo de las fuerzas en lucha"¹⁰. En México se formaron condiciones tales, que las agrupaciones de Sonora designaron de entre sus filas a una personalidad "heroica", "providencial", que pretendía la salvación del país de una lucha "fratricida".

Ciertos rasgos de la psicología social del rancharo que, en uno u otro grado, se conservaban en los hombres del régimen caudillista, imprimían una huella peculiar en las facetas más importantes de su política. A esto se pueden agregar las agudas contradicciones —especialmente en la esfera política— con los círculos porfiristas de la reacción, así como las predisposiciones de ánimo nacionalistas y el anticlericalismo. Al entrelazarse las cosignas ideológicas, suministradas copiosamente por los líderes de las organizaciones obreras y campesinas, con la superestructura ideológica del caudillismo, se contaba con una base de partida para la realización de la política bonapartista. Contribuyó al surgimiento del caudillismo, en forma activa, el aparato estatal organizado de tal manera que lo componían elementos representativos de los intereses de las más diversas fuerzas sociales; incluso muchos destacados funcionarios del régimen porfirista trabajaron, diríase que por la fuerza de sucesión, pa-

ra el régimen caudillista. Todo esto convirtió el aparato gubernamental en una especie de fuerza "fuera de las clases" que actuaba por leyes propias.

Pero, ¿de qué carácter era el régimen bonapartista en México? ¿Tenía la posibilidad de fortalecerse sólida y durablemente en el país, o no había condiciones para ello?

Como subrayaba Gramsci en su trabajo sobre el cesarismo, el bonapartismo puede ser "progresista, reaccionario o tener un carácter episódico, intermedio". Nosotros pensamos que en las condiciones de México la variedad del bonapartismo, el **caudillismo revolucionario**, tenía un carácter intermedio.

En él no hubo fundamento alguno sobre el cual pudiera desarrollarse la consolidación del régimen caudillista. La agrupación política que llegó al poder no partía, en su política, de la aspiración de transformar radicalmente la estructura social y económica del país; aspiraba a modernizar un tanto, a cambiar la distribución clasista de las fuerzas a costa de la limitación de las capas tradicionalmente privilegiadas y a la creación de la clase de nuevos propietarios. Esto explica las contradicciones del grupo de Sonora con la oligarquía porfirista, que a veces tomaban un carácter bastante agudo.

Pero la limitación de objetivos y tareas del **caudillismo revolucionario** creaba, a fin de cuentas, las condiciones para el acercamiento gradual con la gran burguesía y los terratenientes. Al mismo tiempo este régimen, interesado en el apoyo de los trabajadores en la lucha contra la oposición de la derecha, frenaba por todos los medios el crecimiento de una conciencia revolucionaria proletaria empleando aun métodos policíacos y terroristas. Esto fue lo que predeterminó que el caudillismo derivara paulatinamente hacia el conservatismo, lo cual ponía aún más al desnudo la intransigencia de aquellas fuerzas sociales de cuyo equilibrio temporal intentaba aprovecharse el régimen. En realidad, el desplazamiento paulatino de los gobiernos caudillistas hacia la derecha, significaba la liquidación de los métodos bonapartistas de gobierno, y limpiaba el terreno para la elevación de la lucha revolucionaria, ensanchaba la base de partida para la profundización del movimiento por las reformas sociales. Pero, por lo menos en la primera etapa, el **caudillismo revolucionario** creó esperanzas e ilusiones en las amplias capas de la población acerca del comienzo de la era del renacimiento nacional, del progreso social y cultural.

El régimen de caudillismo revolucionario condujo a la deformación de toda la vida política. Los acuerdos en la cumbre, en los que se basaban las relaciones de los hombres del régimen con la dirección de las organizaciones obreras y campesinas, creaban un terreno favorable para la politiquería, la corrupción y la degeneración social. Entre las agrupaciones políticas que aspiraban a la dirección de los obreros y los campesinos, se producía una lucha encarnizada y sin principios por acaparar los puestos en el aparato estatal, por influir en la política gubernamental. En aras de sus objetivos los dirigentes cultivaban la desconfianza y la hostilidad entre obreros y campesinos. El líder del Partido Agrarista, Díaz Soto y Gama, maldecía a la clase obrera considerándola causante principal de todas las desgracias que sufren los campesinos. A su vez, los dirigentes de la CROM y del Partido Obrero, con Morones a la cabeza, veían con desprecio los problemas del campo y sentían una enemistad sin disimulo hacia los campesinos.

El gobierno no sólo no intentó atenuar estas contradicciones, sino que, en realidad, las estimulaba, erigiendo tal política en principio estatal.

Estos rasgos del régimen de caudillismo revolucionario se revelaron claramente durante los años del gobierno de Calles (1924-1928), quien, prestando ayuda a la CROM, llevó hasta el final lógico todas las manifestaciones más negativas de la política caudillista.

Es interesante observar cómo se establecieron las relaciones del régimen político de los años veinte con los grupos sociales echados del poder a causa de la Revolución. La gran burguesía porfirista y los terratenientes, privados de poder político, se encontraban en oposición al nuevo régimen; lo consideraban demasiado "izquierdista" y "plebeyo". Sin embargo, las capas privilegiadas que continuaban, en lo fundamental, conservando sus posiciones económicas, tenían la posibilidad de influir en la vida política del país. Esta influencia se acrecentaba gracias a la inestable base social del régimen caudillista y a la agudización de las contradicciones internas de los círculos gobernantes. La mano de los representantes de la reacción porfirista se dejó sentir en los frecuentes levantamientos militares que tuvieron lugar en los años veinte. A pesar de ello, el ataque directo al gobierno daba pocos resultados a causa del aislamiento de las fuerzas conservadoras y de la falta de apoyo de las

masas. Las sublevaciones de los generales condujeron, casi siempre, a que el gobierno ganara el apoyo de los trabajadores de la ciudad y del campo, y crearon objetivamente nuevas condiciones para el despliegue de la lucha de las fuerzas democráticas por transformaciones sociales profundas. Por eso los círculos burgueses y terratenientes ponían sus principales esperanzas en la regeneración de los hombres del régimen del caudillismo revolucionario, en el refuerzo del ánimo conservador en sus filas. Tales esperanzas no eran infundadas. La inclinación de los hombres del régimen hacia los principios de la propiedad privada, su tendencia a limitar débilmente, con medidas ambiguas, las posiciones de las capas privilegiadas de la población, creaban, objetivamente, condiciones para el acercamiento de todos los defensores de la propiedad privada; el rápido enriquecimiento de los representantes del nuevo régimen aumentaba esta tendencia en la vida política del país; muchos de ellos se convirtieron en grandes hacendados y propietarios rurales con bienes inmuebles en las ciudades, y en accionistas de empresas industriales.

Al fortalecimiento de esta evolución de los círculos gobernantes coadyuvaban los expertos en asuntos económicos y los consejeros del régimen que, por sus ideas, eran allegados a los inspiradores de la política económica del porfirismo. En los años veinte aumentó la construcción de ferrocarriles, se amplió el sistema de irrigación, se creó una red completa de bancos, como el Banco de México. Todas estas transformaciones fortalecieron el papel del Estado en la vida económica del país y poco a poco cambiaron su fisonomía ayudando a su desarrollo.

Ahora bien, sólo unos cuantos gozaron de los frutos de ese progreso. La política de los círculos gobernantes estaba dirigida claramente a fortalecer las posiciones de la minoría privilegiada, a cuyas filas habían ingresado ya no sólo viejos elementos porfiristas, sino también los nuevos ricos del caudillismo revolucionario.

Los bancos estatales encargados del crédito agrícola se convirtieron en provechoso negocio para la burocracia y en gallina de los huevos de oro para los terratenientes. El Banco Nacional Agrícola y Ganadero, fundado en 1926, en dos años de actividad, otorgó 19 millones de pesos en crédito, de los cuales solamente 2.5 millones correspondieron a los campesinos¹¹.

En esta situación, se fortalecía la gran propiedad agrícola

Por otra parte, el apoyo de la CROM daba a la política del grupo gobernante un tinte "proletario". En este sentido, para el caudillismo revolucionario era un verdadero hallazgo la "ideología" de la CROM, que conservaba no pocas ideas ultrarradicales, de izquierda (anticlericalismo vulgar y ánimos anticampesinos) adquiridos del anarquismo.

Valiéndose de estas consignas, en uno u otro periodo de su actividad, el régimen callista aplicó su política de "balanceo social" en la que le ayudaban activamente los burócratas sindicales.

Siendo "responsables" de los destinos del Estado, los líderes de la CROM encabezados por Morones, trataron de demostrar que nada en común tenían con la ideología proletaria revolucionaria, sino que defendían los intereses "nacionales" y aplicaban una política "constructiva". En el congreso de la federación de sindicatos obreros del Distrito Federal, uno de los líderes de la CROM declaró que la clase obrera de México debía rechazar los métodos violentos en la lucha por sus derechos, y tener muy en cuenta los intereses nacionales al plantear sus demandas. La lucha de los trabajadores, afirmaba, debe realizarse con métodos "racionales", "evolutivos". No se trata —declaraba el representante de la CROM— de liquidar al capital, sino de crear la armonía entre el trabajo y el capital, en interés de los mismos trabajadores.

Los años en que los líderes de la CROM estuvieron en el poder les llevaron a una completa degeneración clasista. Se convirtieron en los nuevos ricos del régimen de caudillismo revolucionario.

El enriquecimiento escandaloso de Morones y de otros burócratas sindicales se supo por todo el país. Estos líderes eran accionistas de muchas compañías y poseían casas de renta; lo cual no les impedía declarar cínicamente, para justificarse, que los tiempos nuevos exigían una nueva actitud hacia la política y que los grandes gastos repercutirían en última instancia en bien de la clase obrera.

Al manifestarse por la "paz de clases" los líderes aburguesados de la CROM mantenían una evidente actitud hostil hacia el movimiento obrero independiente, utilizaban su influencia para aplastar toda huelga que no fuera de su agrado.

Los golpes arteros a las acciones del proletariado, el empleo de esquirols, el aplastamiento de huelgas con ayuda de la policía y del ejército, eran los métodos que utilizaban los líderes sindicales encabezados por Morones, quienes se jactaban de su influencia en la política gubernamental. La "hoja escalafonaria" de los líderes de la CROM era verdaderamente "impeccable": nunca indicaba las huelgas frustradas, las divisiones en el movimiento sindical.

La clase obrera de México cada vez con mayor fuerza y decisión expresaba su inconformidad con la política traidora de estos líderes sindicales. Como un yo acuso sonó, por ejemplo, el llamamiento del 18 de julio de 1926 del Sindicato de Ferrocarrileros a los obreros de la CROM. Expresando su preocupación por la frustración de la huelga en ferrocarriles, los obreros hablaban de la degeneración de aquellos que antes declararan ser muy revolucionarios y odiar al régimen explotador. "¿Dónde están ahora?", se preguntaba en el llamamiento. No se les encontrará en sus filas. Búsquenles en las Cámaras del Congreso, en los Municipios y en todos los posibles puestos de gobierno, desde donde quieren dirigirles. Ya no llevan camiseta de obrero y no anatematizan a los explotadores. Compran joyas, viajan en automóvil y les invitan a subordinarse al capital y, si ustedes declaran una huelga, la golpearán traídoramente.¹⁸

Hasta ese momento Morones y compañía habían podido conservar sus posiciones valiéndose del aparato burocrático creado por ellos. La política de la CROM estaba determinada en todos sus matices por el grupo "Acción", cuyos miembros no pasaban de veinte. En él tomaban parte la "crema y nata" de la burocracia sindical mexicana encabezada por Morones. Los métodos empleados por este grupo para controlar el movimiento sindical, se caracterizan por su exagerado cinismo. Los líderes y las organizaciones sindicales subordinadas a sus dictados podían sentirse más o menos tranquilos, les caían algunos mendrugos del suculento "pan sindical". Quienes se oponían a sus dictados eran perseguidos moralmente y con frecuencia eran liquidados físicamente.

Las actividades del grupo "Acción" recordaban más a un sindicato de gangsters por sus métodos de chantaje, de terror y de intimidación, con su divisa "el dinero no tiene olor".¹⁹

La actividad de la CROM reflejaba como espejo todo el haber político de la dictadura caudillista con su demagogia, terror y corrupción. No es casual que los líderes de la CROM se convirtieran en uno de los iniciadores de la lucha contra la iglesia católica, a mediados de los años veinte, realizada por el régimen callista. Esta lucha mostró con toda evidencia la inconsistencia de las posiciones del callismo, su crisis moral y política en la solución de los problemas nacionales.

La Constitución de 1917 declaraba la separación de la iglesia y el Estado y, con sus principios minuciosamente elaborados de las relaciones entre los poderes civil y eclesiástico, parecía crear una base firme para el control de esas relaciones; pero a partir de 1917, las relaciones tensas existentes entre la jerarquía eclesiástica y el Estado iban en aumento constante. Los representantes de la iglesia católica rechazaron la Constitución con el pretexto de que violaba los derechos religiosos de los católicos, haciendo imposible el culto religioso. Hay que decir que ciertas cuestiones de la Constitución permitían este tipo de acusaciones. En los preceptos constitucionales dedicados a las relaciones entre la iglesia y el Estado, se sentía el deseo de influir, por medio de la reglamentación, en la administración de problemas tan complejos como los religiosos. El gobierno federal y los gobiernos locales tenían amplios derechos de intervenir en los asuntos internos de la iglesia y de realizar un control completo aun en los asuntos puramente religiosos. Los gobiernos de los estados tenían derecho para determinar a su antojo el número de sacerdotes. La Constitución prohibía crear organizaciones políticas en cuyos nombres existiera aunque fuese cierto indicio de carácter confesional; sin embargo, estos preceptos de la Constitución no se habían aplicado, sólo habían servido como objeto de duelo de palabras, muy virulentos de tiempo en tiempo, entre los representantes del gobierno y los católicos.

La situación cambió con la llegada de Calles al poder, para quien el problema de la aplicación de los artículos religiosos de la Constitución de 1917 se convirtió en una cuestión política de primera importancia.

Las relaciones entre la iglesia y el Estado se hicieron más tensas con una serie de declaraciones de la jerarquía católica que condenaban los artículos "ilegales" —según sus propias palabras— de la Constitución. Como respuesta a estas declaracio-

nes, el gobierno de Calles hizo manifiesta su decisión de obligar a la iglesia a respetar la Constitución y terminar con la desobediencia de los católicos a las leyes.

En julio de 1926 el gobierno expidió un reglamento sobre la aplicación de los artículos constitucionales referentes a la situación de la iglesia católica frente al Estado; en el fundamental, dicho reglamento, reiteraba las tesis de los artículos constitucionales, pero hacia hincapié en algunas medidas que colocaban bajo control más rígido a la iglesia.

El gobierno comenzó a aplicar estas resoluciones; cerró escuelas particulares, monasterios y deportó a muchos sacerdotes extranjeros. La jerarquía protestó contra esta política declarando que desde el 10. de agosto de 1926 se suspendería el servicio religioso y, en general, todos los cultos religiosos. Los sacerdotes católicos trasladaron su actividad a casas particulares, en las que se hacían cultos secretos. Al mismo tiempo la "Liga para la defensa de la libertad religiosa", creada en 1925, llamó a los católicos a organizar un boicot económico para obligar al gobierno a cambiar de política. El conflicto religioso se agudizó a tal grado que para principios de 1927 en una serie de estados comenzó una rebelión armada de los católicos conocida en la historia con el nombre de "Rebelión de los Cristeros".²⁴ Suscintamente, ésta es la trama exterior del desarrollo del conflicto entre el gobierno y la iglesia; falta encontrar las causas profundas que provocaron y encendieron este conflicto.

Los representantes de la élite gobernante afirmaban que ellos no luchaban contra la iglesia católica como tal ni contra la religión sino que intervenían contra los intentos de la jerarquía eclesiástica de situarse por encima de las leyes constitucionales del país y de hacer el papel de un Estado dentro del Estado.²⁵ Calles y sus partidarios pretendían ser los herederos de las tradiciones democráticas del héroe nacional de México, del presidente Benito Juárez y de sus colaboradores, quienes, a mediados del siglo XIX enarbolaron la bandera de lucha contra la reacción feudal, cuyo sostén era la iglesia católica. Pero los paralelos históricos no iban a favor de los hombres del régimen de caudillismo revolucionario.

Carlos Marx comenzó su libro *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte* así: "Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen como si dijéramos, dos veces. Pero olvidó agregar: una vez co-

mo tragedia y otra vez como farsa" ²². Estas palabras caracterizan, mejor que nada la esencia de las actividades de Juárez, por una parte, y de Calles, por la otra. Las fuerzas democráticas bajo la dirección de Benito Juárez, dirigieron su golpe principal contra el mayor propietario económico y social del país, por la creación de las bases de un Estado democrático moderno. Esta fue una lucha progresista, históricamente justificada. El problema se presentaba de una manera diferente a mediados de los años veinte. La iglesia había perdido ya la potencia económica poseída en el pasado y no podía ejercer una influencia decisiva en la vida política. Es más, los años de la Revolución Mexicana y el periodo ulterior, cuando comenzaron a realizarse, aunque en grado muy limitado, ciertas transformaciones sociales, redujeron las posibilidades de la actividad política de la iglesia católica, y reforzaron las posiciones del clero subalterno y medio, así como de la intelectualidad católica, quien comenzó a tener mayor conciencia de la necesidad de acercar el catolicismo a las esperanzas y aspiraciones de las masas populares y de darle a la religión cierto contenido social. En México aparecieron organizaciones católicas de masas, especialmente juveniles, así como sindicatos de obreros católicos que obligaron a la iglesia católica a adaptarse a la nueva situación y a reexaminar sus fosilizados dogmas anteriores. Se puede decir, sin exageración, que en México existían condiciones para que las divergencias religiosas pasaran paulatinamente a un plano inferior y para que la distribución de las fuerzas sociales se determinara, no por la actitud hacia la religión, sino por las posiciones frente a las transformaciones sociales y económicas del país.

La política del gobierno de Calles impedía, en gran parte, que estas posibilidades echaran raíces profundas y sólidas en la realidad nacional. Contribuía a la escisión por motivos religiosos y hacía renacer el anticlericalismo vulgar. La lucha por el principio "seglar" fue realizada con métodos provocadores y demagógicos por los anticlericales callistas. La histérica propaganda anticlerical y la intromisión en el ejercicio de los ritos religiosos, hirió los sentimientos de los creyentes.

Se pueden juzgar los métodos de lucha contra el "fanatismo religioso" por la legislación de algunos estados del país. En Yucatán, por ejemplo, los sacerdotes debían informar al poder público que no utilizaban agua bendita sino agua común, lo que confirmaba el cumplimiento de las reglas de higiene. En pos de esa misma "higiene" se prohibía besar a las figuras

religiosas y a las reliquias; para lo cual ambas, deberían estar colgadas a una altura no menor de dos metros, o bien bajo "medidas de seguridad" como rejas, etc. Una de las medidas más efectivas de lucha contra la iglesia católica era el derecho de las autoridades de los estados de determinar a su entender la cantidad de sacerdotes; en Veracruz, durante el conflicto religioso su número disminuyó de 195 a 38; en Oaxaca de 180 a 30; en Michoacán de 525 a 50, etc. ²³.

La persecución religiosa tomó caracteres especiales en el estado de Tabasco, donde dominaba arbitrariamente uno de los más cercanos cómplices de Calles, Garrido Canabal. En su ardor antirreligioso anuló todas las fiestas católicas y con un decreto impuso nuevas fiestas "laicas"; expidió leyes mediante las cuales sólo los casados podían ser sacerdotes. El resultado fue que en el estado no quedó ningún sacerdote y todas las iglesias fueron cerradas.

Para hacer más viable la propaganda, los "ateos" de Tabasco llegaron en una de las exposiciones agrícolas del estado a bautizar a un toro como Dios, a un burro como Cristo y a un puerco como el Papa.

Garrido Canabal quiso eliminar a la religión en el estado por medio del adiestramiento militar de la población, convirtiéndola en una masa obediente, que siguiera al pie de la letra las órdenes del caudillo. Para realizar su política llegó a crear destacamentos "anticlericales" especiales llamados **camisas rojas**, principalmente con jóvenes del estado engañados por la altisonante demagogia del caudillo.

Frecuentemente el gobierno federal y los gobiernos de los estados cerraban iglesias que se convertían en centros "sociales", como cuarteles. La prensa mundial dio a conocer ampliamente una fotografía de un banquete organizado en una iglesia por el general Amaro, secretario de la Defensa. Se llegaba, incluso, al asesinato de sacerdotes que ofrecían el culto en secreto, fuera de las paredes eclesiásticas. No pocos agitadores y propagandistas católicos murieron en manos de la policía y las fuerzas gubernamentales. Las organizaciones católicas de masas, incluidos los sindicatos, fueron reprimidas violentamente.

Esta clase de acciones provocó gran descontento entre las masas católicas y creó un terreno propicio para la agudización extrema del conflicto religioso. Los problemas religiosos salta-

ron al primer plano en la vida política del país. Tal lucha, si se emplean las palabras de Lenin, "lo único que consiguió... fue fortalecer el clericalismo militante de los católicos y perjudicar a la causa de la verdadera cultura, pues colocó en primer plano las divisiones religiosas en lugar de las divisiones políticas, distrayendo así la atención de algunos sectores de la clase obrera y de la democracia, de las tareas esenciales de la lucha revolucionaria de clases para orientarlos hacia un anticlericalismo burgués, superficial y falaz"²⁴.

El ejemplo de México confirma de manera clarísima las palabras de Lenin. Gran parte de los obreros se dejó arrastrar por la demagogia antirreligiosa de los líderes de la CROM, que se "acordaron" de su pasado anarquista y se comprometieron en la aventura política de la guerra contra la religión. Con ayuda de la campaña anticlerical, los callistas pretendían mantener al movimiento obrero bajo su control, impedir el crecimiento de la conciencia de clase del proletariado. La guerra encendida por los líderes de la CROM contra la religión, causó un enorme daño a la clase obrera y ahondó su separación. No podía ser de otra manera, pues Morones y sus secuaces no pensaban en los intereses del proletariado, en la unidad de acción de todos sus destacamentos en la lucha de clases. En otras palabras: utilizaron métodos cuyo peligro entrevió Lenin cuando escribió que "el marxismo tiene el deber de colocar en primer plano el éxito del movimiento huelguístico, de oponerse resueltamente en esa lucha a la división de los obreros en ateos y cristianos y de combatir esa división. En tales condiciones, la prédica ateísta puede resultar superflua y nociva, no desde el punto de vista de las consideraciones filisteas de que no se debe espantar a los sectores atrasados o perder el acta en las elecciones, etc., sino desde el punto de vista del progreso efectivo de la lucha de clases que, en las circunstancias de la sociedad capitalista moderna, llevará a los obreros cristianos a la socialdemocracia y al ateísmo, cien veces mejor que la mera propaganda atea"²⁵.

La escisión provocada por la cuestión religiosa llevó a trágicos resultados en el campo mexicano. Parte de los campesinos que habían recibido la tierra, apoyaba al gobierno en su lucha contra la iglesia y veía a los campesinos que seguían a los criterios, como "reaccionarios".

Los elementos verdaderamente reaccionarios, aprovechan-

do el conflicto religioso, intentaron utilizar el descontento de los católicos en interés propio, dirigiendo sus acciones a la defensa de los intereses de la minoría privilegiada. Así, en el *Manifiesto a la Nación*, editado por el alto mando de los cristeros a principios de 1927 se decía que el programa del movimiento prevé la concesión de garantías al capital nacional y al extranjero, respecto a los principios de la propiedad privada y derogación de las leyes que dañaban los intereses de los monopolios extranjeros²⁶.

La gravedad de la situación consistía en que bajo la bandera de defensa de la religión, la reacción logró arrastrar a sus aventuras contrarrevolucionarias a no pocos honrados y sinceros representantes de la población trabajadora mexicana y de la intelectualidad. Y en esto, la posición intransigente de los callistas en los problemas religiosos hacía el juego a la reacción.

La política anticlerical de los círculos gobernantes fue, objetivamente útil también para la iglesia católica y contribuyó a aumentar su influencia sobre la población del país. No es casual que los propagandistas e historiadores católicos escriban acerca del "renacimiento religioso" mexicano, y de la unión de los mexicanos bajo la bandera de la religión. Esta política reforzó las posiciones del ala reaccionaria, extremista, de la jerarquía clerical, que era un enemigo acérrimo de cualquier transformación social progresista. Para ella resultaba muy útil dirigir la polémica por el cauce religioso e inculcar en las masas la desconfianza en las ideas del progreso, del socialismo.

Al señalar los métodos policiacos de lucha contra la religión y aprovechándose de la declaración de los ideólogos del régimen de **caudillismo revolucionario** acerca de su adhesión al "socialismo", los reaccionarios intentaron presentar la política anticlerical de Calles como una política estrechamente unida al socialismo y al comunismo.

Es de interés señalar que los defensores de la iglesia asociaban la campaña contra el supuesto "socialismo ateo" del gobierno mexicano con la denuncia contra el enriquecido grupo callista. ¿Qué derecho moral tenían Calles y sus secuaces, convertidos en la gente más acaudalada del país, para hacerse pasar por defensores de los pobres y oprimidos? Al contestar esta pregunta, los propagandistas católicos escribían que los ataques a la iglesia pretendían desviar la atención del pueblo de los